

Recursos Naturales, Medio Ambiente y Biodiversidad: la Contribución, las Responsabilidades y las Demandas de América Latina

Pascal Olivier Girot

Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una máquina, puesta a nuestro servicio desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era eterna, nos debía esclavitud.

Eduardo Galeano, Úselo y Tírelo

I. América Latina: Una paradoja entre diversidad y desigualdad

La naturaleza de América Latina ha sido tan pródiga que, a pesar de siglos de inserción al mercado mundial y de explotación intensiva de su base de recursos naturales, aún ostenta una extraordinaria diversidad biológica y cultural. Constituye una de las regiones más biodiversas del mundo y goza de una envidiable dotación en recursos hídricos y energéticos. Sin embargo, la distribución de esta riqueza no ha sido la más equitativa, y América Latina tiene la dudosa reputación de ser una de las regiones del mundo con mayor inequidad social. La historia política de América Latina también ha contribuido a la fragmentación territorial y social, ensanchando el abismo entre ricos y pobres, entre los que tienen y los que no.

Este ensayo busca valorar, en un primer tiempo, el significado del extraordinario patrimonio natural de América Latina. Desde cualquier punto de vista, este continente es una potencia mundial en términos de su dotación en biodiversidad y en recursos hídricos. Sin embargo, la persistencia de condiciones de inequidad social, limita el acceso de la mayoría de la población latinoamericana a los beneficios de una gestión sostenible de su patrimonio natural. En un nuevo contexto geopolítico, los últimos años han visto agudizarse la rivalidad entre Estados y empresas transnacionales para controlar recursos naturales y energéticos de importancia estratégica presentes en la región. Esta rivalidad se expresa en la acelerada expansión de monocultivos energéticos o agrocombustibles, en la lucha por lograr concesiones petroleras y de gas natural en los nuevos yacimientos de Brasil y de Bolivia y en crecientes conflictos en torno al uso de recursos hídricos en cuencas compartidas. La región Latinoamericana deberá a futuro elegir entre diferentes modelos gobernanza¹ y diferentes caminos, hay responsabilidades emergentes frente a demandas divergentes.

En el contexto de los objetivos de la agenda de los bicentenarios, este ensayo pretende abordar los temas emergentes en América Latina en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. En particular, se busca esclarecer la relación existente entre el conocimiento tradicional y la conservación de la biodiversidad, en un contexto de apertura comercial (TLC, Acuerdo de

Asociación Centroamérica-Unión Europea) en que las normas de propiedad intelectual y de obtenciones vegetales dominan la agenda de desarrollo de los países. Por otro lado, este ensayo intenta sintetizar los impactos futuros del cambio climático por sub-regiones, perfilando los posibles cambios que operarán en los ecosistemas de la región, y analizará los retos que implican incorporar estrategias de adaptación en una agenda de desarrollo. Finalmente, se aborda la posición, expectativas y estrategias de negociación de América Latina respecto a la agenda ambiental multi-lateral, como parte de la inserción de la región en las relaciones internacionales y en el escenario de la globalización.

En un contexto como el actual, este ensayo busca abordar las siguientes preguntas: ¿Cuál es la contribución del patrimonio natural al desarrollo de la región latinoamericana? ¿Quién custodia estos bienes públicos naturales y culturales, tangibles e intangibles? ¿Cómo inciden las condiciones de inequidad en la adecuada gobernanza de estos recursos de bien público? ¿Existen nuevas figuras y modelos de gobernanza que permiten por un lado aprovechar los extraordinarios recursos energéticos que ofrece la región, sin menoscabo de las capacidades de los ecosistemas de seguir brindando bienes y servicios ambientales para el bienestar de las mayorías? ¿Qué presiones nuevas vendrán a ejercer los procesos de apertura comercial en el marco de la globalización sobre la base finita de recursos naturales y energéticos? ¿Cómo puede encarar la región el reto del cambio climático, y cuáles son las opciones de adaptación en un contexto de crecientes condiciones de vulnerabilidad social y económica?

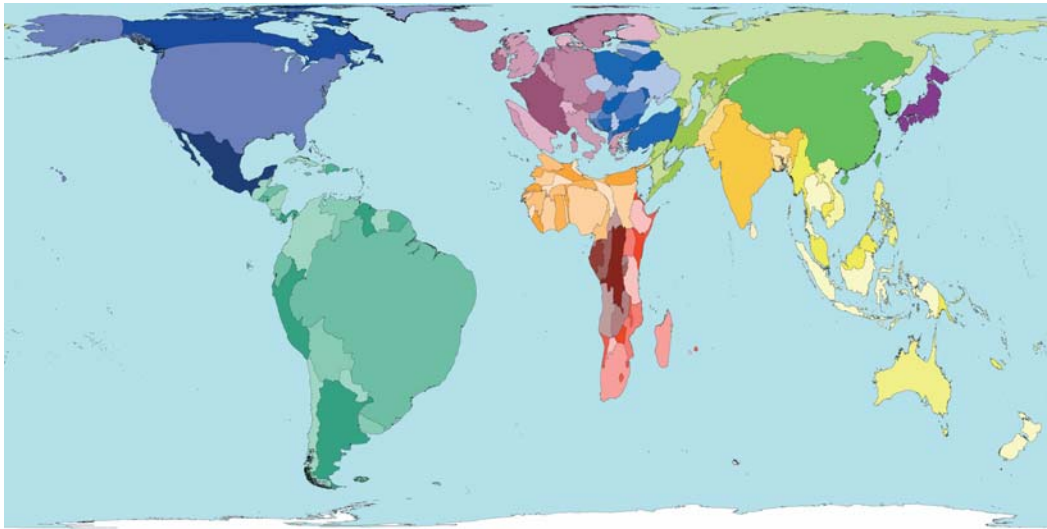
II. El Contexto Latinoamericano: Tendencias y Derrotero

El Caribe, Mesoamérica y Suramérica abarcan una proporción considerable de la biodiversidad del mundo. Comprende 5 de los 12 países megadiversos del mundo, que juntos albergan un 40% todas las especies, vegetales y animales del planeta. Más de 20,000 especies endémicas de plantas existen en los Andes Tropicales, representando un 6.7 % del total mundialⁱⁱ. Pero solo una cuarta parte de estas áreas bioregiones Andinas se encuentran en su condición original o bajo alguna forma de protección, el resto se encuentra transformado en paisajes productivos y otros usos.

La contribución de América Latina a la diversidad de paisajes, ecosistemas y especies es única. Pocos continentes abarcan tantos extremos climáticos, de ambos lados de la línea ecuatorial, y por esta razón América Latina presenta una extensa diversidad de ecoregiones, desde arrecifes coralinos hasta desiertos, y desde bosques tropicales bajos hasta fríos ecosistemas montañosos y estepas. La Cordillera de los Andes es la cadena de montañas más larga del mundo con 7,250 Km de longitud, y el Sistema Arrecifal Mesoamericano frente a la Península de Yucatán es la segunda barrera de arrecife coralina más grande, después de Australia.

La responsabilidad de los pueblos latinoamericanos de custodiar y cuidar esta extraordinaria diversidad ha sido demostrada de múltiples maneras. Latinoamérica tiene alrededor de 4000 áreas protegidas, con una superficie mayor a 4 millones de km², es decir, más del 18 % del territorio terrestre de la región. Estas cifras representan el 4 % del número de áreas pero el 20 % en cuanto a la extensión de todas las áreas protegidas del mundo. Sin duda, Latinoamérica constituye una de las más dinámicas y comprometidas con el establecimiento y manejo de áreas protegidas a nivel mundialⁱⁱⁱ.

MAPA No. 1 Biocapacidad Mundial



Fuente: Worldmapper, 2006. SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan)

La región cuenta con siete de los diez países que poseen los bosques más ricos del mundo y que cubren más de mil millones de hectáreas, equivalente al 46% de la superficie terrestre de la región^{iv}. El bosque lluvioso del Amazonas aún es la mayor área continua de bosques del mundo. Entre el 2000 y el 2005, se estima que se perdieron cerca de 5 millones de hectáreas de bosques, un área del tamaño de Costa Rica^v. A este ritmo, Suramérica está perdiendo anualmente el 0.29% de su cubierta forestal, en tanto que el Caribe pierde el 0.92% y Centroamérica el 1.23%. La deforestación, junto con las prácticas agrícolas no sostenibles, contribuye también a la degradación acelerada de la tierra. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el 45% de las tierras cultivadas, el 14% de los pastizales, y el 13% de tierras boscosas en América Latina están afectadas por algún grado de degradación. La región andina representa el 8% de las tierras que sufren desertificación en América Latina, especialmente en las regiones áridas y semi-áridas del sur de Perú, Bolivia y Chile^{vi}.

América Latina es, además, el centro de origen para muchas especies domesticadas de importancia transcendentales para la agricultura y la seguridad alimentaria del mundo, tales como la papa, el tomate y el maíz. La región de América Latina y el Caribe cuenta además con las mayores reservas de tierra cultivable del mundo, estimadas en 576 millones de hectáreas y equivalentes a casi un 30 por ciento de su territorio de 1.995 millones de hectáreas. De un total de 1.900 millones de hectáreas de suelos degradados en el planeta, la región ocupa el tercer lugar, después de Asia y África, con aproximadamente un 16 %. En Mesoamérica, la degradación de tierras afecta el 26 % del total de tierras agrícolas, estimado en 63 millones de hectáreas^{vii}.

América Latina dispone de un tercio de todas las aguas continentales del mundo en volumen. Esta extraordinaria dotación en recursos hídricos contrasta con las demandas insatisfechas por el acceso al agua, ya que se estima que hoy día 77 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 100 millones a saneamiento. En esta región se ubica el río más grande del mundo (el Amazonas, que drena 8,14 millones de km² en ocho países) y la cuarta cuenca más

grande (Paraguay-Paraná-La Plata, que drena 2,58 millones de km² en cinco países). El área Caribeña y costera de Centroamérica alberga importantes ecosistemas marinos y costeros, incluyendo el segundo sistema de arrecifes coralinos más grande del mundo, a lo largo de la costa caribeña de México y Belice. Los grandes ecosistemas marinos del Pacífico Ecuatorial proveen una de las áreas de pesca más productivas del mundo e incluye cuatro sitios de Patrimonio Marino Mundial (Galápagos, Coiba, Isla del Coco y Malpelo).

La agricultura es un importante factor en la sobre-explotación de los recursos hídricos, y en el abuso de agroquímicos y fertilizantes que tienden a cargar de nutrientes (eutrofización) a los ecosistemas costeros y de agua dulce. En particular, un diagnóstico mundial de aguas internacionales (GIWA) reveló que el litoral Pacífico de Centroamérica es un foco de contaminación significativo por exceso de nutrientes en las aguas costeras. Este forzamiento de nutrientes genera respuestas biológicas, como los brotes de algas tóxicas, que a su vez afecta las comunidades costeras de la región^{viii}.

La extraordinaria diversidad ecológica de América Latina se refleja en su singular diversidad cultural, con 15% del total de los 556 millones de habitantes considerados indígenas. Este diverso patrimonio cultural se refleja también en la amplia gama de grupos étnicos y lingüísticos unidos en Meso y Suramérica por el uso común del español y el portugués. Solo en Guatemala, existen más de 17 grupos lingüísticos, que corresponden al 60% de la población total del país. A pesar de esto, mucho del conocimiento tradicional sobre la biodiversidad se está perdiendo, y en particular sobre la agro-biodiversidad. Como resultado, la desigualdad frente a la seguridad alimentaria sigue causando estragos generacionales.

Latinoamérica ha registrado importantes progresos en materia de salud materno-infantil, con una reducción a la mitad de la tasa de mortalidad infantil entre 1990 (55 por 1000) y 2006 (26 por 1000)^{ix}. Sin embargo, se estima que la desnutrición infantil crónica en América Latina y el Caribe sigue afectando a 8,8 millones de niños menores de 5 años, es decir, 16% de la población de esa edad, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)^x. Estas tendencias confirman la persistencia de condiciones de inequidad que marcará sin duda las generaciones futuras de latinoamericanos.

III. La inequidad, la concentración de la riqueza y escenarios de riesgo futuro

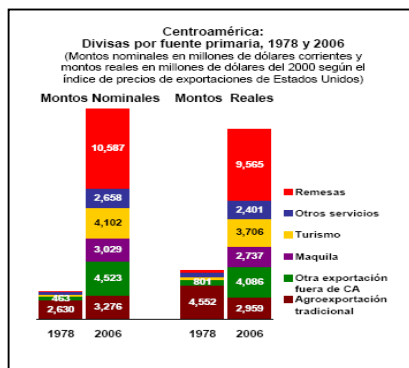
La historia política de América Latina también ha contribuido a la fragmentación territorial y social. Las estadísticas comprueban que es una de las regiones más inequitativas del mundo en la distribución de la riqueza. El 10% de la población más rica percibe cerca del 47% del ingreso total de la región, y a la inversa, al 20% de la población más pobre le corresponde solamente el 4% del ingreso total.

Se estima que existen más de treinta billonarios declarados en la región Latinoamericana. La afluencia también constituye un motor de degradación ambiental, al contribuir con prácticas productivas y sobretodo a patrones de consumo insostenibles. Brasil y México pertenecen al G20 como economías emergentes, siendo respectivamente la novena y doceava economías mundiales por su tamaño. Sin embargo, casi la mitad de la población de América Latina (más de 226 millones de personas) se considera en condición de pobreza. Esta inequidad tiene consecuencias profundas en términos del acceso a la tierra y los recursos, así como el acceso a servicios básicos como atención sanitaria, educación e infraestructura. Frecuentemente, los procesos de degradación ambiental completan el ciclo vicioso de pobreza y cambio ambiental.

Las poblaciones rurales pobres, cuyos medios de vida dependen de la productividad de los ecosistemas, son ciertamente las más vulnerables a los impactos de la degradación ambiental.

Ante una creciente degradación ambiental, y la ausencia de oportunidades de empleo en zonas rurales, muchos de los pobres rurales se ven obligados a emigrar a la ciudad y más allá. Latinoamérica exporta su gente, y este fenómeno masivo deja muchas veces a las comunidades de origen fragilizadas, en dónde mujeres jefe de hogar son la mayoría. No obstante, el aporte económico de la diáspora de emigrantes latinoamericanos es un influjo económico de primera importancia, sobretudo en los países del Caribe y Centroamérica. Hoy en día, las remesas son la principal fuente de divisas de muchos países Centroamericanos son los casi 10 mil millones de dólares en términos reales que envían anualmente miles de migrantes a sus familias (ver Figura 1)^{xi}.

Figura 1: El Peso de las Remesas en las Economías Centroamericana 1978-2006



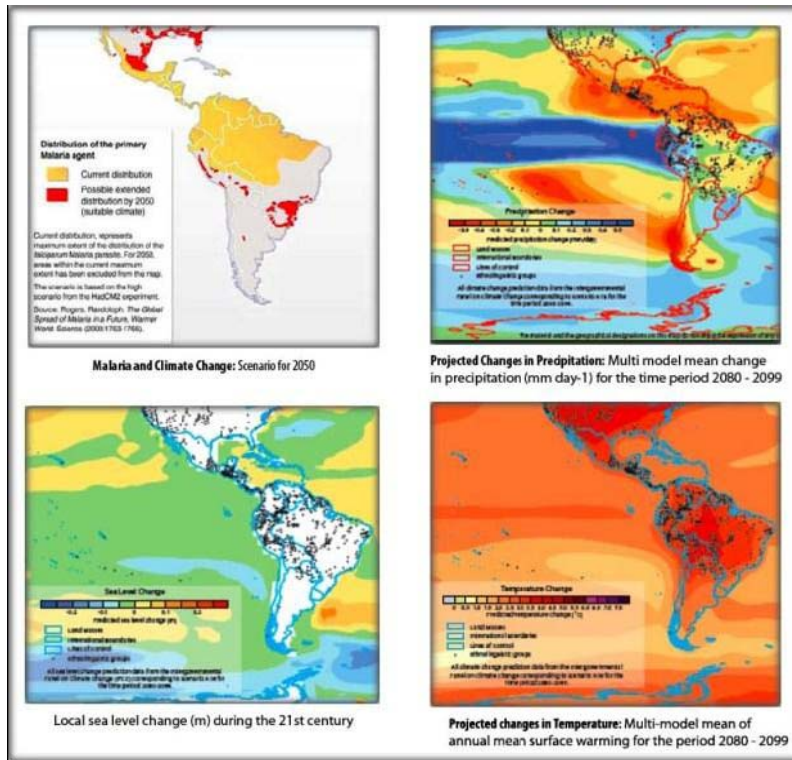
Fuente: PRISMA, 2008

La mayoría, el 76%, de los 556 millones de habitantes de la región vive actualmente en las ciudades, ya que América Latina es una de las regiones más urbanizadas en el mundo. Dos de las diez ciudades más pobladas del mundo, São Paulo (No.3) y Ciudad de México (No.5) ambas con más de 17 millones de habitantes, se encuentran en América Latina^{xii}. Estas megaciudades se están convirtiendo en consumidores críticos de recursos hídricos y energéticos, así como en productores de desechos sólidos y líquidos que —a menudo— son absorbidos por los ecosistemas naturales. La expansión urbana descontrolada, con grandes concentraciones de poblaciones sin servicios básicos adecuados contribuye a la vez a aumentar la vulnerabilidad ambiental mediante la degradación y contaminación ambiental, también crean nuevos riesgos para poblaciones expuestas y además acarrea impactos diferidos en el tiempo y el espacio. La huella ecológica de las mega-ciudades latinoamericanas es de largo alcance, y está inextricablemente ligada a los efectos de la globalización económica de la región.

A pesar de tener abundantes recursos hídricos, en comparación con el promedio mundial, el agua superficial como la contaminación atmosférica son motivo de honda preocupación para mega ciudades latinoamericanas como la Ciudad de México o São Paulo. Estas ciudades contribuyen a procesos de cambio en el uso de la tierra a veces a miles de kilómetros de distancia, por complejas cadenas de valor como la expansión de la frontera agrícola, que contribuyen a las altas tasas de deforestación en América Latina. El cambio ambiental global también va ir agravado este impacto, especialmente en forma de crecientes desastres relacionados con el clima. Los huracanes, inundaciones, derrumbes y sequías son eventos que contribuyen a los crecientes impactos de origen climático en América Latina. El paulatino deterioro de muchos ecosistemas tanto boscosos, dulceacuícolas o marinos tiende a reducir su capacidad auto-reguladora, y limita la oferta de servicios ambientales que pueden brindar. Al reducirse la capacidad reguladora del clima y del ciclo hidrológico, se generan mayores perturbaciones de origen climático. Los escenarios de cambio climático generados por el Panel

Inter.-gubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) fueron plasmados en su Cuarto informe diagnóstico recién publicado en Febrero 2007.

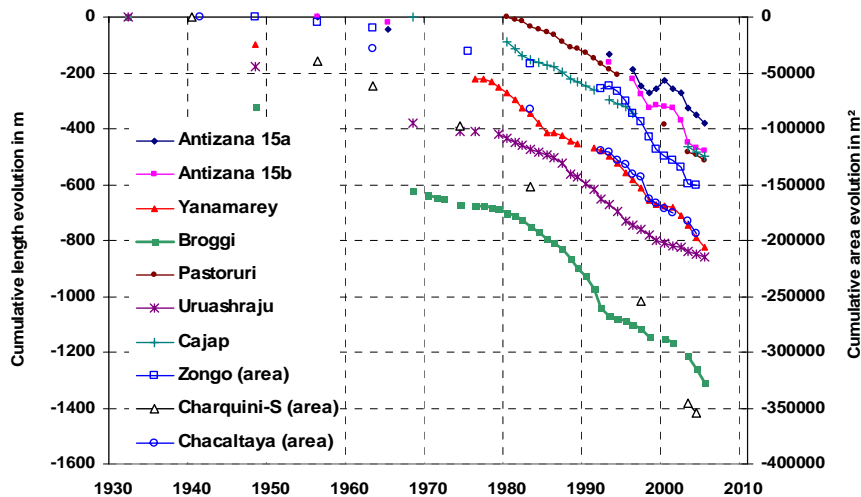
Figura 2. Impactos del Cambio Climático en América Latina



Fuente: Banco Mundial (2008)

Ciertamente, el cambio climático exacerbará la ya de por sí alarmante tasa de deshielo de los glaciares en los Andes superiores, elevará el grado de impacto de las sequías en Centroamérica, así como en las regiones de los Andes, el Chaco y la Patagonia, incrementará la amenaza de inundaciones y derrumbes en muchas comunidades del sur de México, América Central y la región Andina (ver Figura 2).

Figura 3: Retroceso de nueve glaciares alto-andinos 1930-2005

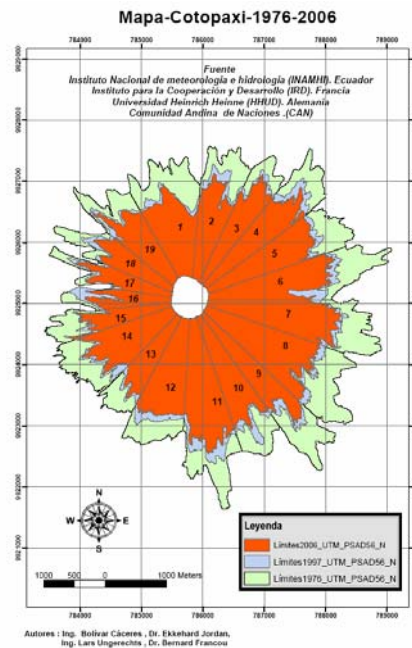


Fuente: IRD, Bernard Francou, 2006

En la región Andina preocupa particularmente el rápido retroceso de los glaciares tropicales, que ya ha sido documentado en los últimos 30 años, gracias a investigaciones conducidas por el IRD (Institut de Recherches pour le Développement). La mayoría de los glaciares altoandinos estudiados durante los últimos 30 años muestran un retroceso acelerado particularmente a partir de los 1990s (ver Figura 3). En el caso del glaciar que cubre el volcán Cotopaxi en Ecuador, se ha registrado una reducción en su cubierta de hielo de un 38.5% entre 1976 y 2006 (ver Figura 4)

Figura 4: Retroceso del Glaciar del Cotopaxi 1976-2006

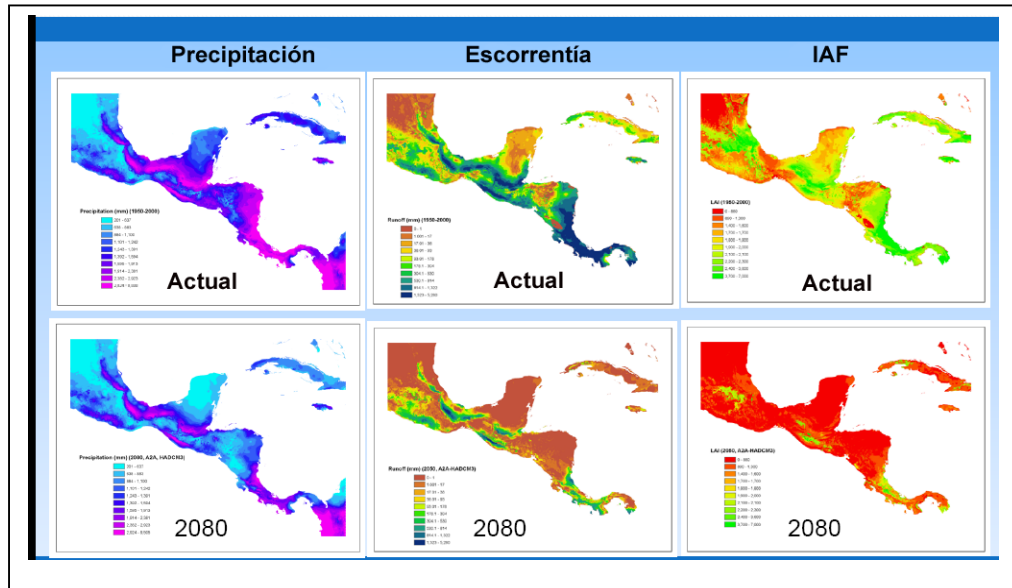
Fuente: INAMHI,IRD,HHUD, CAN, 2007



El cambio climático agravará probablemente la intensidad y la frecuencia de ciclones tropicales en Centroamérica, acentuará los efectos de la variabilidad climática en la forma de sequías cíclicas como el Niño (ENOS), estará al origen de nuevas amenazas hidrometeorológicas ya perceptibles hoy en día. Si bien el deterioro de la salud de los ecosistemas no produce en sí vulnerabilidad, sí pone en riesgo aquellas poblaciones que dependen directamente de su productividad para su subsistencia, en particular en la agricultura, pesca y suministro de agua. Así las poblaciones más vulnerables son las más expuestas a las inclemencias del tiempo, o las que dependen directamente de la productividad de los ecosistemas, incluyendo los agro-ecosistemas, para su sustento (ver Figura 5).

Figura No 5: Escenarios de Cambio Climático en Mesoamérica, según el Modelo de Sensibilidad: A2, HADCM3

Fuente: TNC, 2008



Ante estos escenarios, el rol de ecosistemas, particularmente los que cumplen una importante función hidrológica como lo son los bosques nubosos y los humedales, cobra una creciente importancia en materia de mitigación y reducción de riesgos. El problema de riesgo es entonces, un problema íntimamente relacionado con el desarrollo o más precisamente por carencias dejadas por el modelo de desarrollo actual. Los desastres son indicadores de insostenibilidad en los procesos de gestión del desarrollo y de gestión ambiental (Lavell, A. 1993 y 2000).

A pesar de estos crecientes escenarios de riesgo, existe en América Latina un inagotable reservorio de buenas ideas. En muchos países de la región, se ha innovado consistentemente en términos de enfoques dirigidos a la gestión de la conservación de la biodiversidad, el manejo integrado recursos hídricos y la gestión de recursos marino-costeros. En toda la región están surgiendo nuevos enfoques para la gestión de los recursos hídricos, la agricultura sostenible a través de la gestión de paisajes que respetan la biodiversidad y proveen energías renovables. Esta innovación va acompañada por una amplia legislación ambiental, sin embargo, su aplicación es deficiente. Muchos de los problemas ligados a la implementación de políticas ambientales y aplicación de la legislación están relacionados con la gestión, las capacidades institucionales y los mecanismos de participación ciudadana. Por consiguiente, se requiere un enfoque más integrado para fomentar acuerdos más eficaces de gestión de la biodiversidad a largo plazo y el uso sostenible del agua y los recursos marinos.

IV. La Geopolítica y los recursos naturales y energéticos de América Latina

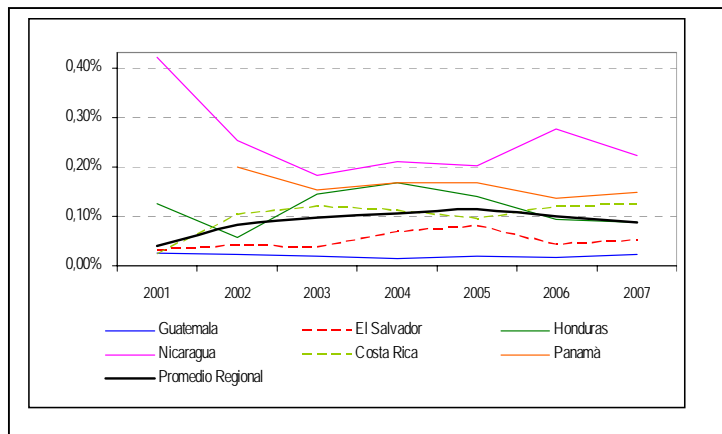
La geopolítica en América Latina está nuevamente de moda. Y en el centro de la contienda, al finalizar la primera década del Siglo XXI, se encuentran los vastos recursos naturales y energéticos de la región, incluyendo el agua, el gas natural y el petróleo. La nueva geopolítica de la energía en América Latina está reactivando la frontera de recursos mineros y energéticos

de la región, bajo una nueva versión de nacionalismo energético, a menudo definido en detrimento del ambiente^{xiii}. Este nacionalismo energético surge paralelamente a acuerdos energéticos sub-regionales, amparado a acuerdos de cooperación como el del Mercosur, como el Gran Gasoducto del Sur, que aún dista de ser una realidad.

Para enfrentar estos retos, muchos países de la región han desarrollado nuevos marcos jurídicos y normativos en materia ambiental a lo largo de los últimos 30 años, generando instituciones que han acumulado más mandatos y obligaciones que capacidades y recursos para cumplir con ellos. La mayoría de los ministerios de ambiente de la región cuenta a menudo con pocos recursos, y goza de relativamente poca influencia política. Muchas políticas de gestión ambiental como la Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) son considerados por sectores económicos y productivos como barreras “no-arancelarias” al libre comercio y hasta un freno para la inversión directa extranjera. En efecto, muchos ministerios del ambiente de la región son el blanco de estas crecientes presiones de mercado para levantar restricciones a la explotación minera, petrolera y agrícola en áreas protegidas y territorios indígenas. Después de la creación de muchos ministerios de ambiente en Centroamérica durante la década de los 1990s, la mayoría de estas instituciones se encuentran con presupuestos cada año más reducidos. Como lo ilustra la Figura 6, el gasto público dedicado a la gestión ambiental en Centroamérica desde 2001 ronda en promedio el 0.1% del PIB, y ha tendido a la baja desde el 2005.

Figura 6: Centroamérica: Gasto público en Gestión Ambiental como porcentaje del PIB 2001-2007

Fuente: UICN, 2008



Y esto ocurre no sólo en los países pequeños de Centroamérica, en dónde la institucionalidad ambiental se tambalea ante la apertura comercial del DR-CAFTA, sino también en países grandes con una institucionalidad consolidada como Brasil, en dónde Marina Silva, la Ministra Federal de Medio Ambiente de todo el primer mandato de Lula da Silva, renunció a su cargo en el 2008 en parte por la pérdida de protagonismo del Ministerio de Medio Ambiente en el Plan Amazonía Sustentable (PAS). En la contienda está el balance entre oportunidades económicas y empleos sustentables, y la capacidad de las autoridades ambientales de combatir la tala ilegal y las tomas de tierras por parte de los *grileros* en la Amazonía Brasileña.

Claro está que las políticas ambientales no ocurren en un vacío político, sino que a menudo se encuentran supeditadas a agendas políticas más amplias. Por un lado, Centroamérica y

Colombia debaten sobre el grado de apertura de sus economías, particularmente en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones. Por otro lado, Bolivia, Ecuador y Venezuela afianzan el control estatal sobre recursos energéticos para canalizar los recursos fiscales derivados de estas riquezas naturales en inversión social. A pesar de las convergencias, los estados de América Latina siguen divididos más que unidos por los ríos y otros ecosistemas compartidos, como bien lo ilustra el diferendo entre Argentina y Uruguay en torno a la controversia de las papeleras en el Río Uruguay. Al no ponerse de acuerdo los estados ribereños, una degradación aún mayor de los recursos hídricos es inevitable. La vulnerabilidad de bienes públicos también se deriva de la ausencia de capacidades para velar por su calidad y protección. Por ejemplo, los vacíos de información en torno al manejo de aguas subterráneas es otro motivo de preocupación, ya que la mitad de los acuíferos de la región presentan un alto grado de contaminación debido, en gran medida, tanto a prácticas mineras y agrícolas no sostenibles, como a la expansión descontrolada de las ciudades (PNUMA-GEOLAC, 2004).

Ante la crisis energética mundial, en la cual los precios de hidrocarburos y otros recursos energéticos se han disparado, la presión sobre los recursos mineros, petroleros, forestales e hidroeléctricos se ha incrementado. La expansión de la frontera agrícola, para abrir paso a plantaciones de caña de azúcar, palma africana y soya, para suplir un mercado emergente para los agro-combustibles, también se suma a las presiones tradicionales que afectan directamente el remanente de la extraordinaria diversidad biológica de la región. Uno de los ejemplos más notable de la expansión de monocultivos energéticos en América Latina es el caso de la Ecoregión del Cerrado en Brasil, que cubre unas 200 millones de hectáreas, una cuarta parte (50 millones de Ha.) de la cual ya está dedicada a monocultivos y ganadería extensiva. Proyecciones para la expansión de producción agro-pecuaria hablan de extenderla unos 75 millones de Ha., lo cual significaría una reconversión mayor en el uso del suelo, y un impacto a gran escala sobre paisajes y ecosistemas. Situaciones similares se están presentando en los países andinos como Perú y Ecuador, y en Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y Nicaragua ya están incrementando sus áreas bajo caña de azúcar y palma africana para suplir el mercado emergente de agro-combustibles. Esto podría contribuir a aumentar más el balance de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la matriz de emisiones de la mayoría de los países latinoamericano es dominado por emisiones originadas en cambios en el uso de la tierra (Honty, G. y E. Gudynas, 2007).

El auge de la exportación de etanol o de biodiesel, bajo un esquema de monocultivo a escala industrial, es más crítico para pequeños países como los Centroamericanos. Aquí el margen para la expansión agrícola es menor. Como lo ilustra el **Cuadro No. 1**, países como Guatemala, Nicaragua, Honduras y Paraguay en Suramérica combinan altas tasas de desnutrición infantil con un sector agro-exportador que representa más del 25% del total de exportaciones. A pesar de países exportadores netos de alimentos, una proporción importante de su población carece de seguridad alimentaria. Estos países pobres, y dependientes del sector primario para su seguridad alimentaria, se verán afectados por conflictos de uso entre áreas protegidas y áreas dedicadas a la producción de alimentos para el consumo doméstico. La expansión de los agro-combustibles afectará probablemente la seguridad alimentaria de algunos países más pobres de la región.

Cuadro No. 1: Comparación de la sub-nutrición alimentaria contra la agroexportaciones de una selección de países de América Latina y el Caribe

Fuente: Gudynas 2007, citado en Honty G. y E. Gudynas, 2007, Tabla No.4^{xiv}

		Exportaciones de Agroalimentos (porcentaje del total exportado)			
		Menores (0 a 24%)		Mayores (más de 25%)	
Subnutridos (porcentaje de la población total)	Bajo (menos del 10%)	Chile Costa Rica México		Argentina Brasil	Ecuador Uruguay
	Alto (más del 10%)	Colombia Haiti Perú Venezuela Rep. Dominicana	El Salvador Jamaica Panamá	Bolivia Guatemala Honduras	Nicaragua Paraguay

Pero, por otro lado, América Latina y el Caribe cuentan con una importante diversidad cultural, la cual ha sido uno de los motores para conservar prácticas y conocimientos ancestrales sobre el medio ambiente y esto ha dado pie a una vibrante tradición de manejo comunitario de los recursos naturales. Esto explica en parte la extraordinaria resiliencia que han mostrado muchas comunidades rurales de la región, debilitadas por la emigración y amenazadas por concesiones forestales y mineras. A pesar de la persistencia de problemas de acceso y reparto a beneficios derivados del desarrollo, existen muchas iniciativas locales que han desarrollado estructuras innovadoras de facilitación entre procesos locales de gestión ambiental junto con nuevas formas de gestión democrática local y de articulación con los niveles nacionales y regionales. Existen instituciones surgidas de tratados de integración sub-regionales tales como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), que han jugado un importante rol en acercar países vecinos en torno a temas de mutuo interés, incluyendo el medio ambiente.

Asimismo, desde la sociedad civil existen en la región red de organizaciones de segundo piso, (Bolsa Amazonia, Red Amazónica de Información Socio-ambiental Georeferenciada-RAISG-, Federación de Municipalidades Centroamericanas-FEMICA; Coordinadora Indígena – Campesina de Forestería Comunitaria de Centroamérica-ACICAFOC; Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal de México-UNOFOC) demuestran claramente la importancia de alianzas locales y nacionales, para lograr la solidaridad entre organizaciones locales y regionales. Estas organizaciones de segundo piso son compuestas de una gran cantidad de organizaciones comunales que han sabido manejar sus bosques comunales en forma sostenible, colocando en el mercado mundial productos forestales certificados. Se estima que una cuarta parte de los bosques certificados por el Forest Stewardship Council (FSC) se encuentran en Mesoamérica^{xv}.

Estas alianzas locales y regionales de sociedad civil no solo han facilitado el acceso por parte de comunidades rurales a mecanismos emergentes de mercado que premian el manejo sostenible de los recursos naturales, sino que también han constituido importantes vehículos de participación ciudadana. Sólo México tiene más de 500,000 ha bosques certificados por el Forestry Stewardship Council. Y si a esto se le suma las áreas de forestería comunitaria del Petén de Guatemala, Mesoamérica es la región del mundo con más bosques certificados manejados directamente por comunidades, muchas de ellas indígenas. Estos avances ofrecen sin duda algunas oportunidades para reducir la pobreza extrema en el medio rural, garantizando la sostenibilidad ambiental, dos de los siete Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Fortalecidos por los éxitos de incidencia política que han tenido muchos de estos movimientos de gestión municipal y comunal, la variada gama de experiencias locales de producción amigable con la biodiversidad siguen enfrentando severas limitaciones en cuanto a su capacidad de vincularse en mercados emergentes, aprovechar en forma más contundente las ventajas comparativas y los mecanismos nuevos de certificación, y sobre todo generar empleo y bienestar económico en muchas comunidades rurales en donde se concentra los mayores niveles de pobreza absoluta en América Latina y el Caribe. Iniciativas internacionales y hemisféricas ligadas a las políticas de apertura comercial (ALCA, TLC, PPP, MERCOSUR) también tendrán impactos locales, y algunos irán en detrimento de medios de vida sostenibles, al menos que existan las redes y las capacidades de unir esfuerzos bajo una óptica de comercio justo y acceso a beneficios.

Una misma ambigüedad permea las relaciones Norte-Sur, en particular en un contexto geopolítico como el Latinoamericano. El Consenso de Washington marcó en Centroamérica toda la década de los noventas, como transición post-guerra fría en la que se alineó con las tesis neo-liberales y muchos estados aplicaron medidas de ajuste estructural, apertura comercial y disciplina fiscal. Hoy soplan nuevos vientos políticos desde el sur. América Latina está en la encrucijada entre dos modelos de desarrollo, uno heredado del Consenso de Washington que promueve el libre comercio y un estado depurado y poco intervencionista, y otro ligado a las tendencias suramericanas a favor de un mayor control estatal sobre recursos naturales y energéticos, al servicio de políticas fiscales redistributivas.

Entre estos modelos existe un sinfín de matices que son además el resultado de políticas de cooperación diferenciadas entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Como contrapeso al Consenso de Washington, la Unión Europea ha venido a través del Dialogo de San José, construyendo una propuesta diferente, que busca reforzar instituciones del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y potenciar la participación ciudadana a través de instancias de consulta permanentes con la sociedad civil organizada durante los años 1990. Ambos procesos siguen en paralelo, y así como los países centroamericanos están debatiendo sobre las virtudes del CAFTA, la Unión Europea discute el Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea. A estos acuerdos de libre comercio con el Norte, contrasta el ALBA y UNASUR, impulsado por Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador con miras a fortalecer la solidaridad latinoamericana y la cooperación Sur-Sur^{xvi}.

V. El Reto de la Gobernanza de los bienes públicos

Dado que la economía regional aún se basa principalmente en los recursos naturales y energéticos, los actuales modelos de desarrollo por lo general tienen una relación adversa con la protección ambiental. Con el incremento en presiones especulativas en torno a agro-combustibles, concesiones mineras o petroleras o recursos hidro-eléctricos, muchos ecosistemas críticos, tanto bajo territorios indígenas como áreas protegidas se encuentran en la mira. El estado de las áreas protegidas es un buen indicador de cómo se da esta tensión de gobernanza entre conservación y desarrollo en muchos países latinoamericanos.

Históricamente, el modelo de creación de áreas protegidas había sido desarrollado a expensas de poblaciones aledañas, y en particular de los pueblos indígenas. El II Congreso Latinoamericano de Parques y otras Áreas Protegidas que se celebró en Octubre 2007 Bariloche, Argentina, reconoció que los Territorios Indígenas de Conservación son un modelo

legítimo de gobernanza para áreas protegidas establecidas dentro de territorios indígenas ancestrales. Las características clave de este modelo son: la integración de cultura y naturaleza, el papel de los derechos consuetudinarios, las instituciones tradicionales y el ejercicio de la autoridad indígena en dichos territorios. Crecientemente el manejo de las áreas protegidas es delegado hacia consorcios de co-manejadores locales, municipalidades y otros actores, incluyendo autoridades indígenas como en el caso de la Capitanía del Bajo Izozog en Bolivia. Estas experiencias de co-gestión o manejo colaborativo de áreas protegidas, a menudo ofrecen oportunidades de empleo de calidad en las comunidades aledañas a áreas protegidas.

Existen oportunidades, sin embargo, para innovar, y el futuro de la gestión territorial en América Latina pasará necesariamente por una acción ciudadana, mediante el forjamiento de alianzas públicas y privadas en torno a territorios y recursos. Existen experiencias novedosas en torno al pago por servicios ambientales y la certificación ambiental, que se han adoptado con éxito en varios países latinoamericanos.

Más allá de experiencias locales aisladas, América Latina requiere de la aplicación a gran escala de nuevas herramientas y modelos de gobernanza^{xvii} que puedan transformar la actual relación entre sociedad y naturaleza, fortaleciendo las capacidades institucionales y ofreciendo oportunidades concretas de participación ciudadana en la gestión territorial. Esto también supone que exista un modelo fiscal que permita generar rentas públicas a partir de una mayor oferta de bienes y servicios ambientales. En el Primer Informe Centroamericano de Gobernabilidad, el Observatorio de la Democracia propone un análisis de los principales problemas de gobernanza de la región, subrayando la importancia de ir más allá de los marcos legales para tomar en cuenta temas de reglamentación y hacienda pública, representación y participación, y la descentralización territorial^{xviii}. Esto confirma que el fortalecimiento de la democracia en América Latina pasa por atender problemas de gestión territorial, mejorar la eficacia de la hacienda pública e incrementar el alcance de la acción ciudadana. Sin embargo, en la práctica los países latinoamericanos siempre enfrentan una férrea resistencia a impulsar nuevas políticas fiscales, como lo acaba ilustrar Argentina con la crisis provocada con la confrontación entre el gobierno y los agricultores y agroexportadores sobre impuestos a la exportación de granos.

América Latina alberga La rivalidad en torno a estos recursos mineros y energéticos tenderá a intensificarse en las décadas venideras. Manejar estos recursos sin impactar el ambiente, ni aumentar la pobreza constituye sin lugar a duda un reto formidable. Esto va generar mayores contrastes entre aquellos países que cuentan con una dotación en recursos energéticos y los que deben importarlos. En un mundo en que la energía será más cara, esto requerirá de políticas de solidaridad intra-regional, como la que se dibuja con el ALBA, y de políticas fiscales capaces de generar rentas públicas para canalizarlas en programas de inversión sociales. Modelos fiscales emergentes para financiar el desarrollo regional y nacional mediante el desarrollo energético sostenible son primordiales para las futuras políticas ambientales en América Latina. Los enfoques orientados al mercado, tales como la certificación de prácticas para la gestión sostenible, y la denominación del origen geográfico son también oportunidades para incluir el reconocimiento de la marca regional y otros instrumentos que aumentan el valor de mercancías producidas en forma sostenible. Una mejor capacidad para insertar pequeñas y mediana empresas en la globalización, agregando valor a productos mediante mecanismos de certificación, ofrece oportunidades de empleo y genera otros beneficios sociales.

Estos modelos fiscales y políticas públicas deberán además rendir cuentas, y ofrecer a la ciudadanía latinoamericana del siglo XXI la transparencia que espera y demanda de sus instituciones públicas. Combatir el flagelo de la corrupción y de la injerencia por partes de grandes empresas en licitaciones de contratos públicos sigue siendo un imperativo

impostergable para muchos gobiernos nacionales. Sin duda que habrá que responder a las demandas de una ciudadana cada vez más educada, informada, más conectada, ya que América Latina es la región después de América del Norte y Europa la región más conectada a internet. Pero la globalización en América Latina se da en un contexto de crecientes asimetrías. Ocampo (2004) reconoce las deficiencias que ha puesto en evidencia el proceso de globalización actual, y sugiere trabajar hacia tres objetivos básicos:

- 1) garantizar un suministro adecuado de *bienes públicos globales*;
- 2) construir un sistema mundial basado en los derechos, es decir, *una ciudadanía global*; y
- 3) *superar gradualmente las asimetrías* que caracterizan al sistema económico mundial^{xix}

Forjar una ciudadanía latinoamericana comprometida en incidir en procesos políticos, capaz de velar por el debido uso de bienes públicos y exigir transparencia y cumplimiento de normas y políticas públicas será la prueba del fuego del fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica. Atender las asimetrías sociales y económicas, tanto dentro como entre los países de la región, será otra tarea urgente.

VI. Conclusiones

América Latina combina el legado de culturas milenarias, arraigadas a sus tierras y conectoras de sus ecosistemas, con la promesa de un mañana más justo y equitativo, en el que la mayoría de los latinoamericanos pueden vivir una vida digna en armonía con su entorno. Quizás la eterna esclavitud a la que Eduardo Galeano condenó, en el epígrafe de este ensayo, la naturaleza no debería ser como tal. Pero en el mismo libro, *Úselo y Tírelo*, Eduardo Galeano nos recuerda que: “*los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales, pero esta pesadilla dice ser nuestro único sueño permitido: un modelo de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas*”^{xx}

Para no seguir cayendo en esta pesadilla, el futuro Latinoamericano deberá partir de su mayor fortaleza: su diversidad biológica y cultural. El modelo de desarrollo que se basa en la explotación sin reparo de la naturaleza, y la extracción de sus recursos naturales y energéticos, no tiene futuro ya que también se basa en la exclusión y marginación de más de 200 millones de latinoamericanos aún sumidos en la pobreza. Pero como lo plantea Gustavo Wilches: *Nosotros somos la vida surgiendo a la fuerza por entre las costuras de la historia. Nosotros somos la vida convertida en mil veces mil especies y en mil veces mil ardidés para oponerse a las adversidades. A pesar de la adversidad y de las penurias, el empeño y el sacrificio de miles de latinoamericanos alimenta a diario redes de solidaridad, como lo son las remesas, que operan sin la intermediación de gobiernos, ni de organismos regionales. ¿Cómo aprovechar esta capacidad creativa para explorar figuras de gobernanza y de gestión que permiten a la vez crear oportunidades para salir de la pobreza y para custodiar y valorar el extraordinario patrimonio natural de la región?*

Para lograr alcanzar estos loables objetivos nos estamos partiendo de cero. La región latinoamericana ha innovado con instituciones de integración regional, y cuenta con un andamiaje significativo de políticas regionales y sub-regionales en materia ambiental.

En este ensayo, se intentó demostrar que las problemáticas sociales y económicas que enfrenta la región son inseparables de la problemática ambiental, y que su solución requiere de profundos cambios institucionales y de modelos de gobernanza. ¿Cómo salir entonces del girón tradicional de la “industria de la sostenibilidad” en el que han actuado desde Río 1992 las ONGs y el movimiento ambientalista, y propiciar un amplio proceso de diálogo con sectores, actores e instituciones hasta ahora no tomados en cuenta, ni mucho menos articulados por una agenda de desarrollo sostenible? En una coyuntura de choque de modelos, y de creciente

divergencias entre el legado del Consenso de Washington que sigue promoviendo la apertura comercial como única vía de acceso a la modernidad y la emergencia de un nuevo estado social en América Latina, que busca aprovechar los recursos naturales y energéticos de la región para financiar la inversión social, será cuestión de tiempo para juzgar las bondades de cada modelo. Está claro que ambos modelos siguen viendo la naturaleza como la eterna esclava, con pocas opciones para una gestión sostenible de la biodiversidad y de los recursos hídricos. Sabemos que el modelo de apertura comercial neoliberal sigue generando pobreza, exclusión social y degradación ambiental. Por otro lado, muchos de los conflictos sociales en torno las políticas que ha impulsado el actual gobierno de Bolivia, por ejemplo, tienen su origen una polarización de la sociedad, con profundas raíces históricas, en torno a estos dos modelos antagónicos. Construir un nuevo modelo de desarrollo en América Latina, que sea incluyente y sustentable, requiere de nuevos enfoques, nuevos actores movilizados en torno a temas aglutinadores. ¿Pero como operar este cambio sin caer en la tentación autoritaria, la arbitrariedad y el conflicto social?

El fortalecimiento de la democracia en América Latina pasa por una política de descentralización de la gestión territorial, por mejorar la eficacia de la hacienda pública e incrementar el alcance la acción ciudadana. En este sentido, hay que ir más allá de compromisos institucionales, y propiciar cambios no solo a nivel de sectores, instituciones y políticas ambientales, sino a nivel de individuos, ciudadanos productores y consumidores, que puedan comprometerse al cambio para lograr una mayor calidad de vida para todos. Ante el reto del cambio climático, que vendrá a exacerbar la vulnerabilidad de los medios de vida de millones de habitantes, es necesario movilizar a todos los niveles de la sociedad para buscar opciones de adaptación y abocarse a una verdadera gestión local del riesgo. La adaptación es un proceso que la sociedad emprende dirigido hacia la reducción de vulnerabilidades, integra conocimientos tradicionales y métodos científicos para comprender mejor los riesgos climáticos y genera políticas y prácticas locales que aspiran a forjar una mayor seguridad en los campos de la alimentación, los recursos hídricos y el acceso con equidad a las fuentes de energía, entre otras cosas.

Sin embargo, en el contexto latinoamericano que hemos descrito en este ensayo, los retos que implican incorporar estrategias de adaptación en una agenda de desarrollo son formidables. En un primer nivel, el conocimiento científico que tenemos sobre el fenómeno del cambio climático y sus impactos sobre ecosistemas, medios de vida y economías nacionales y regionales es aún aproximado. Es urgente establecer, por ende, de cuales conocimientos disponemos y cuales necesitamos generar a corto plazo. Para esto es necesario invertir en la investigación científica y aprovechar las redes de investigadores especializados que ya existen en la región, con en el caso de las redes colaborativas de investigadores del Instituto Interamericano de Investigación sobre el cambio global (IAI). Hay que partir también de la rica cosmovisión y del conocimiento tradicional indígena que en muchos países de la región latinoamericana sigue vigente y constituye un patrimonio cultural clave para la adaptación futura.

En segundo lugar, está claro que el agua estará entre los primeros recursos directamente afectados por el cambio climático. El agua mata tanto por sus excesos como por su escasez, ya que hoy en día la mayoría de las pérdidas y daños por desastres son atribuibles a amenazas hidrometeorológicas. Para promover políticas de adaptación en el manejo de recursos hídricos, se debe primero que todo mejorar la calidad y accesibilidad de información hidrológica, para permitir una adecuada planificación del recurso. Algunos países de la región han creado nuevos marcos normativos para la gestión del agua, pero la inmensa mayoría de los países latinoamericanos cuentan con leyes del agua que datan de mediados del siglo XXI. La

adaptación pasa por adaptar el marco legal a las nuevas realidades para asegurar, ante la futura escasez, el acceso equitativo de una amplia gama de usuarios del agua. Pasa también por una revalorización de los servicios que brindan los ecosistemas, y una política fiscal y tarifaria que castigue el que contamina y despilfarra a la vez de que premia a el que ahorra. Mejorar la gobernanza del agua pasa también por estimular y mejorar la eficiencia en el uso final del agua, con la difusión masiva de tecnología de ahorro de agua, y la modernización de los sistemas de administración y suministro de agua de riego y agua potable.

Pero, en tercer lugar, el suministro a largo plazo del agua va depender en muchos países de la región de la capacidad de los ecosistemas de suplir bienes y servicios ambientales. Sabemos que el cambio climático afectará la distribución geográfica de ecosistemas y especies, y en algunos casos como los ecosistemas de alta montaña en los Andes, el retroceso de glaciares tropicales significará muy serios problemas de abastecimiento de agua a mediano plazo. ¿Cómo revalorar el rol de las Áreas Protegidas, tanto nacionales como municipales, para aumentar la resiliencia de ecosistemas y mejorar su capacidad de proveer servicios ambientales a las comunidades vecinas que dependen de ellos para sus medios de vida? Cabe preguntarse, además: ¿Hasta dónde podrán fungir los ecosistemas, en algunos casos sujetos a acelerados procesos de degradación, como amortiguadores climáticos e hidrológicos?

En cuarto, y último, lugar, enfrentar el espectro mortal del cambio climático requiere de un cambio de políticas de desarrollo. Al igual que el debate en torno a la gestión del riesgo y la prevención de los desastres, la adaptación al cambio climático requiere de políticas públicas, nacionales y locales, que ataquen directamente las prácticas mal-adaptativas, que reglamentan en forma más riguroso el uso de la tierras a través de políticas de ordenamiento territorial y que propongan nuevos marcos normativos para una gestión estratégica del agua. En última instancia, la adaptación al cambio climático pasa por una efectiva gestión local del riesgo. Ha habido avances importantes en la región latinoamericana, y muchos de los conceptos de gestión del riesgo acuñados por un pequeño grupo de investigadores en la Red Latinoamericana de Estudios Sociales sobre Desastres (conocida como La Red) han venido haciendo camino y están siendo incorporados en iniciativas regionales como el PREDECAN en la Región Andina, en el Proyecto PREVDA en Centroamérica y por una nueva generación de marcos normativos en materia de gestión del riesgo y reducción de desastres amparados a Marco de Políticas de Hyogo.

En el debate que polariza la región hoy en día, las posiciones encontradas se dividen sobre la participación de la región en foros internacionales. Comprender estas posiciones, expectativas y estrategias de negociación de América Latina respecto a la agenda ambiental multi-lateral es necesario ya que definirá a futuro la inserción de la región en las relaciones internacionales en un contexto de globalización. De hecho, América Latina ha siempre sido proactiva en foros ambientales, y desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en Junio 1992, ha avanzado mucho en el cumplimiento de los compromisos multi-laterales en materia ambiental. Sin duda, existen hoy en día más ministerios de ambiente en la región latinoamericana que hace una década, y las capacidades de la sociedad civil organizada en materia de fiscalización y propuesta se ha ido fortaleciendo, aunque en forma paulatina. No obstante, la capacidad de gestión ambiental en muchos países de la región se ve rebasada por la cantidad de Convenios, Acuerdos y Tratados vigentes en materia ambiental. A pesar de reconocer el interés común por salvaguarda el patrimonio natural del planeta, muchos países definen a menudo sus derechos y obligaciones en materia ambiental por el estrecho lente de los derechos soberanos (Giro, 2008)^{xxi} Por esta razón, persisten hondas diferencias en el tratamiento y seguimiento a acuerdo multilaterales ambientales en América Latina. Por un lado, los países más grandes como

México y Brasil tienden a dominar las negociaciones en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático o en la Convención sobre Diversidad Biológica. En cambio en los países Centroamericanos, la capacidad de seguimiento por parte de los gobiernos a la gran cantidad de acuerdos multi-laterales en materia ambiental ha tendido a estancarse. Esto se debe también a una falta de transversalización de temas de gestión ambiental estratégica en los gabinetes económicos y sociales de los gobiernos nacionales. Los críticos del derecho ambiental y de las políticas de gestión ambiental, particularmente en lo que refiere al control y las estimaciones de impacto ambiental, aducen que constituyen barreras no-arancelarias al comercio internacional, y que por ende limitan el desarrollo. Además, la ineficiencia de muchas instituciones públicas obstaculiza las aspiraciones por una visión a largo plazo y una gestión más estratégica de políticas ambientales (Giroto, 2008).

América Latina tampoco se puede aislar, y necesita abrirse al mundo. De hecho, las generaciones de migrantes latinoamericanos brindan continuamente a sus comunidades de origen recursos financieros, pero también ideas, prácticas y costumbres nuevas. La innovación siguen siendo una de las cartas maestras que dispone la región, pero los países aún inviertan poco en educación, ciencia y tecnología. Esto equivale a condenar la región a seguir dependiendo de tecnologías y patentes del Norte. Algunos países como México, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica han seguido invirtiendo en investigación científica y desarrollo tecnológico. Es necesario, sobretodo de cara al reto del cambio climático, redoblar estos esfuerzos y ampliarlos hacia otros países, dónde la educación y la ciencia siguen rezagados.

Existe la oportunidad para que surja una nueva agenda política regional que potencie los logros obtenidos hasta la fecha. Esta nueva agenda debería partir de un dialogo de saberes y un replanteamiento de muchas premisas sobre el futuro del modelo de desarrollo actual. Sin duda, esta nueva agenda deberá velar por balancear intereses nacionales con objetivos regionales, atender las simetrías, respetar el extraordinario patrimonio cultural de saberes tradicionales que existen en la región y proveer incentivos para generar beneficios palpables para las mayorías del uso sostenible de la biodiversidad. Una tarea para hoy y por los latinoamericanos que aún no han nacido.

ⁱ Gobernanza se entiende como “las interacciones entre las estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones sobre asuntos que preocupan a la gente, y cómo los ciudadanos y otros interesados directos pueden expresarse” citado de UICN, 2005, Benefits beyond Boundaries, Proceedings of the Vth World Parks Congress, IUCN: Gland, Switzerland.

ⁱⁱ PNUMA, 2000 citado en PNUMA, GEOLAC, 2004

ⁱⁱⁱ Declaración de Bariloche, II Congreso Latinoamericano de Parques y otras Áreas Protegidas,

^{iv} PNUMA, GEOLAC, 2004

^v PNUMA, GEOLAC, 2004

^{vi} PNUMA 2003 Geo Andino 2003: Perspectivas del Medio Ambiente, México: PNUMA/Comunidad Andina

^{vii} Gómez y Gallopín, 1995 citados en PNUMA, GEOLAC, 2004

^{viii} Global International Waters Assessment, GIWA, 2006

^{ix} World Bank, Regional Fact Sheet from the World Development Indicators, 2008

^x Datos provenientes del Centro de Noticias de la ONU, el sitio web es

<http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=6787&criteria1=Latina&criteria2=niños>

^{xi} Herman Rosa, 2007 Entre la Acumulación y la Resistencia: Bosquejando las Nuevas Geografías de C.A, No.3, PRISMA, El Salvador

^{xii} <http://www.citymayors.com/statistics/largest-cities-population-125.html>

^{xiii} Isbell, Paul 2008 Energía y Geopolítica en América Latina, Madrid: Real Instituto Elcano

^{xiv} Honty Gerardo y Eduardo Gudynas, 2007 Agrocombustibles y Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: Situación Desafíos y Opciones de Acción, CLAES-D3E

^{xv} Pascal Girot, 2000, Raíz y Vuelo: El Uso Sostenible de los Recursos Naturales en Centroamérica, UICN: San José

^{xvi} Pascal Girot, 2008, La globalización y la Agenda Ambiental Centroamericana en Universidad para la Paz 2008 Políticas de Recursos Naturales en Centroamérica: Lecciones, Posiciones y Experiencias para el Cambio, San José, Alianza de Aprendizaje para la Conservación de la Biodiversidad en el Trópico Americano: Ediciones ALPI pp 83-100

^{xvii} Véase la nota I, UICN 2005, Ibid.

^{xviii} Asociación **Estudios para el Futuro**, 2007 Primer informe centroamericano de gobernabilidad jurídica e institucional, Guatemala: Observatorio de la Democracia

^{xix} Ocampo, J.A., 2004 Reconstruir el Futuro: Globalización, desarrollo y democracia en América Latina, CEPAL, Santiago: Grupo NORMA, p.95

^{xx} Eduardo Galeano, 1994 Úselo y Tírelo: El mundo del fin del Milenio visto desde una Ecología Latinoamericana, p120.

^{xxi} Girot, Pascal 2008 La Globalización y la Agenda Ambiental Centroamericana, capítulo en el libro Políticas Ambientales en Centroamérica: Nuevas Tendencias y Enfoques, San José:UPAZ